

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO



JUZGADO SEGUNDO (2°) ADMINISTRATIVO TRANSITORIO
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

EXPEDIENTE	11001-33-35-027-2019-00273-00
DEMANDANTE	NELSON FRANCISCO TORRES MURILLO
DEMANDADO	NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

CUESTION PREVIA:

El artículo 155 numeral 2 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que los juzgados administrativos conocerán en primera instancia de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad sin atención a su cuantía.

Por otra parte, a través del Acuerdo PCSJA22-11918 del 2 de febrero de 2022¹, se dispuso, entre otras cosas, la creación de tres (3) juzgados administrativos transitorios en el Circuito de Bogotá cuya competencia comprende las reclamaciones salariales y prestacionales promovidas por servidores públicos de la Rama Judicial y con régimen similar.

En razón de lo anterior, por medio del oficio CSJBTO22-817 del 24 de febrero de 2022 emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá se estableció que al Juzgado Segundo (2°) Administrativo Transitorio del Circuito de Bogotá le

¹ «Por el cual se crean unos cargos con carácter transitorio para tribunales y juzgados a nivel nacional».

correspondía asumir el conocimiento de los procesos originarios de los Juzgados Administrativos 19 a 30 del Circuito de Bogotá

En este orden de ideas, y en atención a los referidos parámetros de competencia, y reparto, se avocará el conocimiento del presente asunto y proferirá la decisión que en Derecho corresponda, previas las siguientes consideraciones:

Excepciones previas:

Se observa que se contestó la demanda dentro de la oportunidad establecida para tal fin, y la accionada propuso como excepción previa la falta de integración del litisconsorcio necesario, prevista en el numeral 9° del artículo 100 del Código General del Proceso, sobre la cual se pronunciará el Despacho a continuación.

La accionada considera que la defensa de la legalidad de los actos demandados está en cabeza del ejecutivo. En este sentido, solicitó vincular como litisconsorte necesario a la Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda, y Departamento Administrativo de la Función Pública (f. 152 cuaderno ppal.).

Por su parte, la apoderada de la demandante manifestó que: «...*de acuerdo con el artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la representación de la Nación, Rama Judicial en los procesos contencioso administrativos, se ejerce, de manera general, por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, quien fue quien expidió los actos administrativos que se demanda[n] y quien tiene la capacidad legal para poder comparecer directamente a este proceso, así mismo tiene (sic) partida presupuestal propia y personería jurídica. **Por lo tanto no está llamada a prosperar** [la] **excepción** [propuesta]*» (negrita del texto original) (f. 157 vuelto cuaderno ppal.).

Así las cosas, este Despacho considera que no le asiste razón a la entidad demandada pues una cosa son las normas que dan fundamento a los actos administrativos y otra los efectos que producen dichos actos. Dado que el medio de control que se ha instaurado es el de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo tanto, el pronunciamiento que se emita, en caso de accederse a las

pretensiones formuladas, versará únicamente sobre los efectos de los actos acusados, y no sobre la legalidad de las normas que les dan sustento, lo cual es materia propia del medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De otro lado, la entidad o entidades competentes para defender, en sede judicial, los actos demandados, en principio, son aquellas entidades que los expiden, dado que son precisamente estas, las que tienen capacidad de disposición sobre aquellos, previo el cumplimiento de las respectivas normas, así como para ejecutar las acciones necesarias para darles cumplimiento, con base en los mandatos constitucionales y legales que las crean y establecen su naturaleza, competencias y funciones.

Es claro que la entidad demandada cuenta con personería jurídica y está revestida de las facultades necesarias para ejercer su representación de manera autónoma, pues cuenta con la capacidad jurídica, administrativa y financiera para ejecutar y defender los actos administrativos que expide, motivo por el cual no son de recibo los argumentos esgrimidos por la parte demandada, y en consecuencia se negará la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario.

En relación con las demás excepciones formuladas en la contestación de la demanda, se resolverán en la correspondiente sentencia puesto que dichas excepciones se oponen a las pretensiones de la demanda.

Procedencia de la sentencia anticipada:

El Despacho considera que en el caso bajo consideración se cumplen los requisitos previstos en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo² para dictar sentencia

² «...Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial:

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;

b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas;

con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

anticipada, por lo que no resulta necesario celebrar audiencia inicial y se prescindirá de esta toda vez que:

1. El objeto del presente asunto es de puro Derecho.
2. No se requiere el decreto ni la práctica de pruebas.
3. Las partes solicitaron únicamente tener como pruebas los documentos aportados con la interposición de la demanda y su contestación, y sobre las mismas no se formuló tacha o desconocimiento.

Decreto de pruebas:

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 173 del Código General del Proceso³, por cumplirse con los presupuestos de pertinencia⁴, conducencia⁵, y utilidad, se tendrá como prueba la documentación aportada por las partes.

Lo anterior, sin dejar de lado que la apoderada de la entidad demandada expresó en su escrito de contestación que se deben tener en cuenta los antecedentes administrativos adjuntos con el escrito de la demanda (f. 153 –vuelto-).

Por tal razón, este Despacho tendrá como pruebas las siguientes:

- ✓ Petición del 2 de Octubre de 2015 (fs. 2 a 17 cuaderno ppal.), mediante la cual se solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013 como remuneración mensual con carácter salarial.

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles».

³ «...Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente».

⁴ Para este Juzgado la pertinencia hace alusión a la relación que tiene lo que se pretende demostrar con el medio probatorio que se tiene.

⁵ El Despacho entiende por conducencia la aptitud que la ley le da a un medio probatorio para que con este se pueda demostrar un hecho.

- ✓ Resolución 8259 del 25 de noviembre de 2015 (fs. 20 a 22 cuaderno ppal.), por medio de la cual se negó la solicitud formulada por el demandante.
- ✓ Resolución 8621 del 2 de diciembre de 2015 que concedió para ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el recurso de apelación interpuesto por el actor (f. 24 cuaderno ppal.).
- ✓ Certificado DESAJ16-THCER-7724 del 15 de diciembre de 2016 (f. 23 cuaderno ppal.), a través del cual se certificó tiempo de servicios del demandante en la Rama Judicial.

Por otra parte, en lo referente a la solicitud de pruebas documentales que formuló la parte actora (f. 102 cuaderno ppal.), es preciso destacar que en virtud del artículo 173 del Código General del Proceso, los jueces están facultados para abstenerse de ordenar la práctica de pruebas que, directamente o por medio de petición, hubiese podido conseguir la parte que la solicita, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida por la administración, circunstancia que deberá ser acreditada sumariamente.

Por lo anterior, el Despacho negará dicha petición toda vez que los medios probatorios aportados con la presentación de la demanda dan cuenta de la situación jurídica a resolver y dado que no se acreditó que se hubiese solicitado previamente a la interposición de este medio de control, las pruebas deprecadas y que dicha petición no hubiese sido atendida por la entidad demandada.

Fijación del litigio:

Teniendo en cuenta la demanda, su contestación, y el material probatorio aportado, se procederá a fijar el litigio de la siguiente manera:

Situación fáctica:

1°. El demandante mediante petición del 2 de Octubre de 2015 (fs. 2 a 17 cuaderno ppal.), solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial, dispuesta en el Decreto 383 de 2013, como remuneración mensual con carácter salarial,

desde el 1° de enero de 2013, así como el pago de la Prima Especial contemplada en el artículo 15 de la ley 4ª de 1992 (fs. 16 y 17 del Cdo. Ppal.).

2°. Por medio de la Resolución 8259 del 25 de noviembre de 2015 (fs. 20 a 22 cuaderno ppal.), la entidad demandada negó la petición, decisión que fue apelada por el demandante, guardando silencio la administración, por lo cual habría operado la figura del silencio administrativo negativo a través de acto ficto.

En este orden de ideas, el Despacho considera que el **problema jurídico** se contrae a determinar si es dable reconocer el carácter salarial de la bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013, en favor del demandante y si es dable el reconocimiento y pago de la Prima Especial contemplada en el artículo 15 de la ley 4ª de 1992.

Así las cosas, en virtud del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo⁶, una vez en firme las anteriores decisiones (pronunciamiento sobre las excepciones previas, decreto de pruebas y fijación del litigio), se concede a las partes el término de diez (10) días para que presenten por escrito sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rinda el concepto que estime pertinente.

Por último, se reconocerá personería a la abogada Angélica Paola Arévalo Coronel, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.406.144 y tarjeta profesional 192.088 del Consejo Superior de la Judicatura, cuyos canales de notificación son: aarevalc@deaj.ramajudicial.gov.co y deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co; para representar a la entidad demandada en los términos del poder conferido (f. 153 cuaderno ppal.).

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SEGUNDO (2°) ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

⁶ «Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito»

RESUELVE:

PRIMERO: AVOCAR el conocimiento del presente asunto, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: NEGAR la excepción previa de falta de integración de litisconsorcio necesario, por los argumentos arriba señalados.

TERCERO: DAR aplicación al trámite de sentencia anticipada previsto en el artículo 182 A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en razón de lo expuesto en este auto.

CUARTO: PRESCINDIR de la audiencia inicial y **DECRETAR** como pruebas la documentación indicada en esta providencia.

QUINTO: NEGAR el decreto de las pruebas documentales solicitadas por la parte demandante, conforme conforme lo expuesto en la parte considerativa.

SEXTO: FIJAR el litigio dentro del presente asunto, en los términos indicados en este proveído.

SÉPTIMO: Una vez en firme las anteriores decisiones, **CONCEDER** a las partes el término de diez (10) días para que presenten por escrito sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que rinda el concepto que estime pertinente.

OCTAVO: RECONOCER personería a la abogada Angélica Paola Arévalo Coronel, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.406.144 y tarjeta profesional 192.088 del Consejo Superior de la Judicatura, cuyos canales de notificación son: aarevalc@deaj.ramajudicial.gov.co y deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co; para representar a la entidad demandada en los términos del poder conferido.

NOVENO: ADVIÉRTASELE a las partes que deberán allegar todos los documentos que pretendan hacer valer dentro del caso bajo consideración, tales

como poderes, recursos, entre otros, a la siguiente dirección de correo electrónico: correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

De igual manera, deberán atender los parámetros previstos en el artículo 78 del Código General del Proceso, so pena de la sanción allí prevista.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

Francisco Julio Taborda Ocampo

Juez

Juzgado Administrativo

002 Transitorio

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

5a326eed22b9511676bbbf5bfc7a41b5c4c1ce80f830dbb005c5eb48ff1350fb

Documento generado en 14/03/2022 10:25:23 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente

URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>